

Cali: ¿Hacia un punto de no retorno en la violencia juvenil?

Pablo Alberto Ortega Poveda

4.1 Contexto de la ciudad

4.1.1. Condiciones socioeconómicas

En términos socioeconómicos, Cali se caracteriza por un lento avance en sus indicadores sociales, que dejaron a la ciudad rezagada en los últimos años frente al resto de los casos de estudio; y por la existencia de amplias zonas con altos niveles de pobreza y marginalidad entre sus habitantes.

En torno a lo primero, es evidente que en la última década Cali se estancó en el mejoramiento de las condiciones sociales de su población. La tercera ciudad más importante del país obtuvo unos avances muy moderados en pobreza, empleo y educación; y, durante dicho período, sólo logró un progreso importante en el NBI.

Para comenzar, Cali pasó de ser la ciudad de interés con el menor índice de pobreza en el 2002 (6,2%) a estar en el segundo peor lugar en el 2013 (4,4%). Así mismo, entre 2003 y 2013, con excepción de Ibagué, Cali fue la única ciudad que no redujo su tasa de desempleo a un solo dígito; la dejó en un 11,6%, por encima del promedio nacional (9,2%). Finalmente, también se estancó en cobertura de educación secundaria: en el 2013 alcanzó un 71,3%, inferiorlos demás casos.

Contrario a lo anterior, la ciudad avanzó en materia de NBI. Si se compara la situación de 1993 con la de 2005, el índice de NBI pasó del 20,6% al 11%. Sin embargo, estos resultados no se han extendido en toda la ciudad y en amplias zonas se presentan altos niveles de pobreza y exclusión

social, específicamente en las comunas: 13, 14, 15, 16 y 21 del Distrito de Aguablanca; 1, 18 y 20 en la zona de ladera; 3 en el centro, y 6 y 7 en el nororiente (Alcaldía de Cali, 2012a). Esos territorios se caracterizan por problemas de hacinamiento crítico en los hogares y una oferta limitada de servicios públicos, dos áreas que mide el índice de NBI (Alcaldía de Cali, 2012a, p. 27; Defensoría del Pueblo, 2014).

Además, en estas zonas se ha concentrado población migrante y desplazada que se ha instalado en Cali en los últimos años, proveniente del Pacífico colombiano (p.e. Buenaventura en el Valle) y de otros municipios del departamento y del norte del Cauca. Según la Alcaldía de Cali (2012b, p.2), entre 1998 y 2011, la ciudad recibió a 19.945 familias (80.947 desplazados), la mayoría de ellas conformadas por mujeres y menores, que se ubicaron en asentamientos ilegales; las zonas más vulnerables de dichos territorios, dado que allí confluyen los peores indicadores sociales y la presencia de grupos armados, criminalidad organizada e inseguridad.

En ese sentido, la persistencia de altos niveles de recepción de población desplazada y su localización en asentamientos ilegales ha restringido la capacidad de atención estatal de las necesidades de la población más vulnerable de Cali (Entrevista 20. Funcionario), y, sobre todo, ha generado las condiciones propicias para que se perpetúen y recrudezcan las dinámicas de violencia juvenil en estas zonas de la ciudad. Sin embargo, es necesario aclarar que, a diferencia de otros casos de estudio, la violencia juvenil no sólo se restringe a las comunas donde están dichos asentamientos; es un fenómeno con una presencia generalizada en la ciudad. Estos aspectos se abordarán en las siguientes secciones del capítulo.

4.1.2. Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO

La criminalidad y la violencia en Cali han estado determinadas por dos factores: de un lado, la influencia del conflicto armado, el crimen organizado y el narcotráfico del departamento del Valle; y, del otro, la importancia que tiene la ciudad para el logro de los intereses estratégicos de grupos guerrilleros, paramilitares, al servicio del narcotráfico, etc., dada su condición de tercera ciudad del país y su cercanía al océano Pacífico. Estos aspectos, a su vez, han favorecido los altos niveles de violencia juvenil que ha predominado en la ciudad durante los últimos años.

En este apartado se analizará, primero, cinco etapas relacionadas con la presencia y las acciones de los GVO en la ciudad, resaltando las articulaciones de la violencia juvenil con el conflicto armado y el narcotráfico. Luego, se evidenciará la importancia que tiene el control territorial de Cali

para los GVO y su relación con el recrudecimiento de la violencia juvenil durante el período de estudio.

4.1.2.1. Primera etapa (1970 - 1994): el M19 y los carteles del narcotráfico

La urbanización del conflicto armado inició tempranamente en Cali con la inserción del M19 a la ciudad en la segunda mitad de los 70 así como con la aparición de grupos al servicio del narcotráfico en el departamento del Valle en los 80.

Desde su creación, el M19 tuvo una influencia importante en los municipios de las cordilleras Occidental y Central del departamento del Valle (Yumbo, Pradera y Florida) y, especialmente, en su capital, donde formó milicias urbanas que operaron en el barrio Siloé y en el Distrito de Aguablanca (Nuñez, 2010).

Por ello, en 1983, el Gobierno Betancur (1982 - 1986) realizó una fuerte ofensiva militar contra el grupo en el barrio Siloé, que lo obligó a un repliegue estratégico. No obstante, esta organización no cesaría sus acciones militares y políticas hasta la firma del acuerdo de paz en 1990 y en esos años tendría una injerencia central en la criminalidad y la violencia de la ciudad (Defensoría del Pueblo, 2014; Camacho y Guzmán, 1990).

En efecto, el M19 no sólo tuvo contactos con grupos de limpieza social sino que, sobre todo, fue determinante en la creación o fortalecimiento de las pandillas juveniles que ya operaban en sus zonas de influencia (Urrea y Quintín, 2000).

Las pandillas tienen sus orígenes en la época de los 90. Petecuí es un barrio de invasores a los cuales el M19 les entregó tierras. A partir del proceso de paz con el M19 se crearon las primeras pandillas: aparecieron La Pandilla del Cholao, La del Hueco y La del M, que se dedicaban a seguir la herencia del M19; robaban el carro de leche y la repartían entre los jóvenes y los abuelos más pobres del barrio. (Entrevista 42. Líder juvenil)

Entre 1982 y 1986, jóvenes del Distrito y Siloé recibieron instrucción militar, dotación y capacitación en el manejo de armas de fuego, y formación ideológica por parte de guerrilleros del M19 (Urrea y Quintín, 2000). Posteriormente, varios de esos jóvenes liderarían pandillas y bandas, y pondrían sus habilidades al servicio de actividades criminales y violentas tanto de estos grupos como de estructuras criminales más organizadas (Urrea y Quintín, 2000).

Por su parte, a finales de los 70 se creó el Cartel de Cali, grupo narcotraficante que sería uno de los principales exportadores de droga a los Estados Unidos entre 1979 y 1994, año en que fue desarticulado por acción de la Fuerza Pública (Los capos del cartel de Cali, 2012). Esta organización centró sus operaciones en la ciudad, dada su cercanía a la costa Pacífica y la facilidad para el lavado de activos, tejiendo una red de corrupción con autoridades civiles e integrantes de la Fuerza Pública. En cuanto a la violencia juvenil, el Cartel vinculó en la organización a algunos exmilitarios e integrantes de pandillas como guardaespaldas y sicarios (Urrea y Quintín, 2000).

4.1.2.2. Segunda etapa (1994 - 1999): las FARC, el ELN y el Cartel del Norte del Valle

En los 90, las FARC y el ELN coparon los espacios que dejó el M19, mientras que el Cartel del Norte del Valle hizo lo mismo tras la desaparición del Cartel de Cali.

Las FARC y el ELN siguieron la ruta trazada por el M19 en las zonas de ladera y en el Distrito. Estos grupos no solo crearon frentes urbanos y milicias, como los frentes Manuel Cepeda Vargas y Omaira Montoya, respectivamente (Defensoría del Pueblo, 2014), sino que además tuvieron un contacto directo con pandillas y bandas locales, dinamizando la violencia juvenil, al igual que su predecesor.

Yo era líder de esa pandilla y teníamos peleas con otra pandilla. Un día estábamos parados en una esquina y llegó un hombre que decía pertenecer al Frente 30 de las FARC y nos dijo que si queríamos pertenecer a la milicias urbanas de la guerrilla. Eso fue por allá en el año 96. Nos dijo que sólo teníamos que hacer presencia y que la idea era que le prestáramos seguridad al barrio de los jíbaros y los ladrones. A mí me dio risa, porque esos éramos nosotros (...) A los 15 días aceptamos y comenzamos a patrullar el barrio con brazaletes de las FARC y con fusiles. (Entrevista 45. Exagresor)

La misma modalidad fue implementada por el ELN, generando una guerra entre ambos grupos:

Pero las cosas cambiaron cuando entró el ELN como en el 98. El ELN hizo lo mismo que las FARC con nosotros: armó a la pandilla rival y la hizo parte de las milicias urbanas. Entonces se desató una guerra muy tremenda. Había mucha matazón por todo lado y ya era una guerra con armas largas y todo. (Entrevista 45. Exagresor)

Las acciones de las FARC y el ELN recrudecieron la intensidad de la violencia juvenil y establecieron un primer antecedente de subcontratación de pandillas y bandas por parte de grupos del conflicto. Como sucedió con el M19, estas acciones no facilitaron la conformación de cuadros políticos y militares afines a la insurgencia; más bien incrementaron las acciones criminales de los grupos juveniles y facilitaron el uso de jóvenes por parte de organizaciones delictivas (Urrea y Quintín, 2000). Además, la articulación entre el conflicto y la violencia juvenil mostró un rasgo aún presente en Cali: la confrontación de algunos GVO juveniles con los grupos que los han patrocinado (Entrevista 45. Exagresor).

Durante los 90 también fue central la expansión del Cartel del Norte del Valle (CNV) al resto del departamento: las facciones de este grupo han protagonizado el conflicto en Cali y el resto del Valle desde la década del 2000 hasta la fecha.

El Cartel emergió entre 1994 y 1995 como una coalición de narcotraficantes y mandos medios del extinto Cartel de Cali, y tomó el control de las rutas de tráfico de drogas al exterior por el Pacífico y por el corredor que del Cañón de Las Garrapatas conduce el centro del departamento (Tuluá, Buenaventura, Palmira y Cali) (Tobón, 2012). Durante este período, el Cartel mantuvo un equilibrio con los demás grupos que hacían presencia en el Valle (Tobón, 2012).

4.1.2.3. Tercera etapa (1999 - 2004): creación del Bloque Calima de las AUC

El incremento de las acciones de las FARC y el ELN, así como el rompimiento de los acuerdos tácitos entre los grupos guerrilleros y los narcotraficantes favorecieron la aparición de estructuras paramilitares en el Valle (Nuñez, 2010). Vicente Castaño conformó el Bloque Calima de las AUC en 1999, por solicitud de algunos sectores empresariales y, contó con el apoyo del CNV³⁹.

En particular, los secuestros masivos de civiles en la Iglesia La María en Cali por el ELN (1999) y de los diputados de la Asamblea del Valle por las FARC (2002) explican el ingreso de los comandos urbanos del Frente Farrallones del Bloque Calima a la ciudad (Defensoría del Pueblo, 2014). El ejercicio de la violencia por parte de este grupo y del resto de los frentes del Bloque quedó al servicio de las distintas facciones del CNV (Tobón, 2012).

En este período, la Fuerza Pública libró una fuerte ofensiva contra el ELN y las FARC que los obligó a replegarse a las zonas montañosas del departamento. No obstante, estos grupos lograron mantener durante ese tiempo milicias urbanas con un bajo perfil en Cali, encargadas de labores de apoyo logístico a los demás frentes del Valle y del Cauca (Defensoría del Pueblo, 2014; Nuñez, 2010).

4.1.2.4. Cuarta etapa (2004 - 2011): fracturas y guerra en el Cartel del Norte del Valle

Antes de la desmovilización del Bloque Calima en el 2004, las fracturas internas del CNV condujeron a una guerra entre organizaciones criminales que iniciaron una nueva etapa en la violencia del Valle Cauca.

Este conflicto empezó en el 2003 cuando dos jefes del Cartel conformaron ejércitos privados, apoyados en estructuras sicariales, para librar una guerra por el control del narcotráfico en el centro y norte del departamento: Wilber Varela (Jabón) y Diego Pérez (Diego Rastrojo) organizaron Los Rastrojos; mientras que Diego Montoya (Don Diego), antiguo jefe del CNV, se alió con Giraldo Rodríguez (el Señor de la Camisa Roja) para crear a Los Machos (Nuñez, 2010). Luego, las falencias en la desmovilización del Bloque Calima fortalecieron a ambos grupos, quienes incorporaron a sus filas a exparamilitares, y se expandieron al resto del departamento y al sur del país (Arevalo y Guáqueta, 2014).

Tanto Los Machos como Los Rastrojos hicieron presencia en barrios y comunas de Cali mediante la cooptación y financiación de oficinas de cobro y pandillas, a partir de los cuales se disputaron el control de los mercados ilegales de la ciudad (Defensoría del Pueblo, 2014; Arevalo y Guáqueta, 2014).

La captura de Diego Montoya, a finales de 2007, favoreció la derrota militar de Los Machos por parte de Los Rastrojos. Esta victoria le permitió al grupo expandirse hacia la zona de influencia de paramilitares desmovilizados y establecer alianzas con grupos guerrilleros en torno al narcotráfico, consolidando su dominio en el Pacífico colombiano y en la ciudad (Arévalo y Guáqueta, 2014).

4.1.2.5. Quinta etapa (2011 – actualidad): lucha por el control de Cali entre GPDP

El período final es una nueva edición de la guerra entre GPDP herederos del narcotráfico por el control del Pacífico y el Valle, que se describió anteriormente. Sin embargo, en esta etapa, en la que se enmarca el análisis de la violencia juvenil del capítulo, se observa una expresión urbana de la confrontación, puesto que Cali se convirtió en uno de los principales escenarios de disputa entre estos grupos.

La hegemonía de Los Rastrojos terminó con la incursión de Los Urabeños al Pacífico, en el marco de la expansión de este GPDP del norte al sur del

país. El acceso al Valle fue conseguido por este grupo como resultado de una alianza con Los Machos en el 2011 (Defensoría del Pueblo, 2014). Previamente, el dominio de Los Rastrojos se había comenzado a resquebrajar por la captura de sus líderes (Diego Rastrojo y Los Comba); lo que generó disputas al interior del grupo que fueron aprovechadas por sus rivales (Arévalo y Guáqueta, 2014).

La intensidad del conflicto en Cali tiene que ver con el interés de Los Rastrojos por contener la ofensiva y expansión de Los Urabeños. Sin embargo, es necesario aclarar que esta disputa no se ha librado directamente por estos grupos, sino por pandillas, bandas criminales y oficinas de cobro que se han agrupado mediante alianzas y acuerdos bajo alguno de los dos bandos (Defensoría del Pueblo, 2014). Así, los GPDP han dinamizado y recrudecido la violencia juvenil, como resultado de la estrategia de subcontratación de GVO locales que han usado históricamente los grupos del conflicto que han operado en Cali.

4.1.2.6. Cali como territorio estratégico

En parte, la tendencia histórica a un alto nivel de violencia en Cali tiene que ver con que la ciudad es un territorio estratégico para grupos del conflicto, carteles del narcotráfico y grandes agrupaciones del crimen organizado.

En efecto, la ciudad es un escenario propicio para la articulación de la “micro-criminalidad” local con la “macro-criminalidad” que tiene conexiones internacionales (Arévalo y Guáqueta, 2014). Cali es un nodo de actividades criminales de pequeña escala que generan rentas ilegales, como la extorsión, el microtráfico y el abastecimiento de insumos para la producción y el procesamiento de narcóticos; y, al tiempo, es una zona estratégica para el control de rutas de tráfico de drogas, armas y contrabando (Defensoría del Pueblo, 2014).

Algunas comunas son centrales para el desarrollo de dichas actividades (Defensoría del Pueblo, 2014): (1) las comunas 1, 18 y 20 de la zona de Ladera tienen salida hacia la zona rural del municipio, los Farallones de Cali y las áreas rurales de los municipios vecinos de Buenaventura y Dagua. Estos territorios permiten la interconexión fluvial hacia el océano Pacífico. (2) En la zona oriental, las comunas 6 y 21 limitan con Palmira y Candelaria, municipios que conforman un corredor hacia la Cordillera Central; y las comunas 14 y 15 colindan con los municipios del nororiente del Cauca (p.e. Puerto Tejada) y tienen algunos barrios por donde pasa el Jarillón del río Cali, corredor fluvial que permite el tránsito entre los departamentos del Valle y el Cauca. (3) Por último, la comuna 10, donde se encuentra el principal centro de acopio de la capital del Valle

4.2. Análisis de la violencia juvenil

4.2.1. Los Jóvenes y la violencia organizada

Actualmente, en Cali se observa el mayor nivel de intensidad de la violencia juvenil entre los casos de estudio. Ello se explica, al menos por dos factores, que serán desarrollados más adelante: (1) la alta participación de jóvenes en la mayoría de GVO de la ciudad; de ahí que ellos sean los principales actores materiales (no necesariamente intelectuales) y víctimas de la violencia que se está ejerciendo en el marco de la confrontación por el control de la ciudad entre diferentes GPDP. (2) La transformación de la estructura y las acciones de los GVO juveniles (pandillas y barras violentas) en grupos más organizados, criminales y violentos.

En particular, es posible identificar 7 GVO que tienen relación con la violencia juvenil en Cali: barras violentas de fútbol, pandillas, bandas criminales, oficinas de cobro, grupos al servicio del narcotráfico, grupos guerrilleros y GPDP.

La siguiente figura describe el nivel organizativo de estos grupos (alto, medio o bajo), el tipo de violencia que ejercen (indiscriminado y “rudimentario” o selectivo y profesionalizado) y las relaciones que ellos tienen. Las flechas señalan el proceso de transición que se mencionó anteriormente.

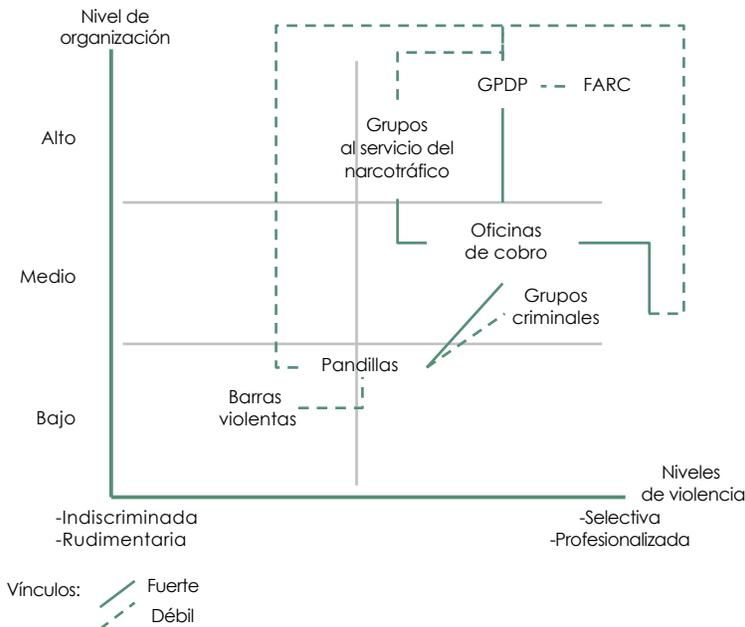


Figura 2. Grupos de violencia organizada en Cali (2011 – 2014).

Fuente: Elaborado por CERAC.

A continuación, se abordarán las dos características idiosincráticas de la violencia juvenil en Cali, a partir de un análisis de los GVO de la ciudad en tres niveles:

4.2.1.1. Nivel bajo: pandillas y barras violentas de fútbol

En Cali, las pandillas tienen un rol central tanto en la violencia juvenil como en las problemáticas de seguridad, tal vez mucho mayor que en otros casos de estudio. Ello se debe, en primer lugar, al proceso de transición de estos grupos, de formas tradicionales de pandillerismo a estructuras más organizadas e involucradas en actividades criminales (Entrevista 35. Funcionaria; Personería de Cali, 2013)⁴⁰.

Sin embargo, no todas las pandillas han sido objeto de estas transformaciones, por lo que es posible observar tres tipos de ellas:

Primero, las pandillas “tradicionales”, conformadas por menores de edad, para quienes los aspectos simbólicos y de identidad que los unen son tan importantes como la defensa del territorio contra los grupos rivales y la participación en actividades criminales como el robo en diferentes modalidades (Entrevista 30. Funcionaria; Entrevista 32. Líder juvenil). Estos grupos se caracterizan por tener una estructura poco jerarquizada; ejercer una violencia indiscriminada en la que prima el uso de piedras, cuchillos y, en pocos casos, armas de fuego; y por su interés de alcanzar reconocimiento público, mediante la visibilización de sus acciones (Callejas, 2012).

Segundo, están las pandillas que adquieren las características de una banda criminal. Estos grupos no se limitan a acciones de defensa y expansión territorial; más bien, su rasgo distintivo es la participación directa o a través de redes, en delitos graves como sicariato, comercio de armas, microtráfico, secuestro, extorsión, asalto a bancos y proxenetismo (Personería de Cali, 2013).

Por último, algunas pandillas han adquirido un perfil más cercano a las oficinas de cobro. Estos grupos se han especializado en actividades criminales de alto impacto y, al igual que las oficinas, ofrecen sus servicios a los GVO de alto nivel), quienes las contratan para la ejecución de acciones específicas a cambio de dinero (Personería de Cali, 2013). La Personería (2013) las denomina “pandillas mercenarias” por su participación en homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de personas, entre otros graves hechos criminales.

Recuadro 4. Homicidios en el marco de la violencia pandilleril en Cali

Un indicador del peso que tienen las pandillas en la seguridad de la ciudad lo proveen los homicidios. Según el Observatorio Social de Cali (2014), la participación del número de homicidios cometidos en el marco de enfrentamientos o retaliaciones directas entre pandillas en el total de homicidios de la ciudad fue del 12,9% (238 de 1.843) en el 2012, porcentaje que se incrementó el año anterior a un 17,9% (349 de 1.939).

Además, tanto las pandillas mercenarias como las criminales cuentan con armas de fuego sofisticadas e industriales (fusiles, granadas de fragmentación, revólveres y armas automáticas); tienen capacidad de control de los GVO de bajo nivel en sus zonas de influencia; y operan como intermediarias de dichas organizaciones frente a narcotraficantes y GPDP (Personería de Cali, 2013).

Allí, desde el 2012, es donde se comienza a dar una transición de pandillas a bandas criminales (...) No todas las pandillas han hecho el tránsito, hay tres tipos de pandillas: las pandillas “clásicas” que se caracterizan por el consumo de drogas por parte de sus integrantes; las pandillas que se han convertido en bandas de microtráfico, que son los mismos integrantes de las pandillas pero con armas, medios de transporte y control de venta de drogas; y las pandillas que sólo responden a las oficinas de cobro. (Entrevista 42. Líder juvenil)

Un segundo aspecto que evidencia la gravedad del fenómeno del pandillerismo es su presencia en casi la totalidad del caso urbano (17 de las 22 comunas) de la capital del Valle. Según la Personería de Cali (2013), la mayoría de estos grupos operan en las zonas más pobres y marginales de la ciudad, como el Distrito de Aguablanca (62 pandillas - el 46,2% del total) y la zona de Ladera (29 - 21,6%). De esas áreas, las comunas 13 y 20 tienen la mayor concentración de pandillas (21 y 26, cada una).

Sin embargo, esta problemática no es exclusiva de los barrios más empobrecidos de Cali; en comunas de estratos medios (p.e. en la 2 y la 3) y altos se observan pandillas con injerencia en hurtos, venta de droga y sicariato. Además, 5 pandillas operan en toda la ciudad: la Alianza y la Contra-alianza, por ejemplo, cuentan con cerca de 200 miembros que se dedican a actividades delictivas y a enfrentamientos con rivales (Personería de Cali, 2013).

Por último, es necesario destacar la alta intensidad de la confrontación entre las pandillas de Cali durante el período de estudio. Si bien esto tiene que ver con la disputa más amplia por la ciudad entre Los Urabeños y Los Rastrojos, los enfrentamientos interpandillas tienen una lógica relativamente autónoma: estos grupos pretenden controlar su territorio de influencia, derrotando o doblegando a sus rivales, con el doble objetivo de acceder a rentas ilegales que fortalezcan su organización y ascender en la estructura criminal de la ciudad.

En efecto, las pandillas son grupos que compiten fuertemente por el control territorial, y la expresión más clara de ello son las restricciones a la movilidad que establecen (Entrevista 38. Funcionaria). En esas líneas imaginarias los grupos controlan, sobre todo, rentas ilegales derivadas del microtráfico (Entrevista 32. Funcionaria). Así, gran parte de los enfrentamientos entre pandillas tienen que ver con la expansión o violación de esas fronteras (Callejas, 2012); puesto que el dominio de territorios para la venta de drogas termina siendo la principal forma en que las pandillas fortalecen su estructura interna (Personería de Cali, 2013).

En ese sentido, es crítica la situación en tres barrios de Cali, El Vergel (comuna 13), Siloé (comuna 20) y Potrero Grande (comuna 21), dado que en estos sitios hay un gran número de pandillas (entre 1 y 2 grupos por cada sector), lo que recrudece las lógicas de disputa territorial, trayendo graves afectaciones a la población (Entrevista 38. Funcionaria; Entrevista 42. Líder juvenil).

Por otro lado, en Cali también hacen presencia barras violentas de fútbol. Estos GVO juveniles son altamente jerarquizados, le dan importancia a los aspectos identitarios y se involucran en enfrentamientos con armas de fuego contra integrantes del equipo rival. El alcance de estos grupos no se limita a zonas marginales de Cali; “Las barras violentas son grupos que incurren en los límites de la intolerancia en cualquier parte de la ciudad. Hay barras en zonas de estrato alto. Por ejemplo, Templete (barrio de estrato 4) es un punto de encuentro donde se enfrentan estas bandas” (Entrevista 35. Funcionario).

Si bien la magnitud de la violencia de las pandillas invisibiliza la de las barras violentas, esta problemática no es marginal. De hecho, parte de las hinchadas más grandes de Cali (Barón Rojo y Avalancha Verde) se han involucrado cada vez más en dinámicas criminales y violentas, al punto que la Personería de Cali (2013) las describe como pandillas que operan en toda la ciudad, con cerca de 200 miembros cada una, y que se involucran en microtráfico y hurtos.

4.2.1.2. Nivel intermedio: bandas criminales y oficinas de cobro

Otros dos tipos de GVO que tienen una alta injerencia en las dinámicas de la violencia juvenil son las bandas criminales y las oficinas de cobro.

Las oficinas de cobro son la máxima autoridad en la estructura criminal de los barrios de Cali; ellas coordinan el trabajo de las bandas y pandillas, y ejercen un rol de intermediación entre estos grupos y las estructuras armadas del nivel alto (Entrevista 23. Líder juvenil)⁴¹. Las oficinas tienen una larga tradición en la dinámica delictiva de la ciudad, dado que emergieron como ejércitos privados al servicio de GVO durante el auge de los carteles de la droga (Callejas, 2012).

Estos grupos se caracterizan por tener una estructura jerárquica, en la que es posible identificar dos roles: el jefe o “la firma”, y los subordinados o “los muchachos” (cerca de 25 en cada grupo) (Callejas, 2012; Entrevista 30. Funcionaria). El jefe es una persona reconocida dentro del mundo criminal que no sólo agencia los “contratos” con los “clientes” para la comisión de las actividades delictivas que realiza el grupo, sino que también define las tareas que realizan sus subordinados; por su parte los “muchachos” son, en su mayoría, jóvenes (hombres y mujeres) que ejecutan dichas órdenes (Callejas, 2012).

En particular, las oficinas se involucran en cuatro tipos de delitos: (1) los cobros de deudas⁴² (Callejas, 2012); (2) El microtráfico de drogas (Personería de Cali, 2013); (3) El asesinato por encargo (sicariato), realizado en su mayoría por jóvenes (Callejas, 2012); (4) Por último, las extorsiones (Entrevista 23. Líder juvenil; Entrevista 37. Líder juvenil).

Por su parte, las bandas toman la misma forma organizativa de las oficinas, pero tienen una posición menor en la estructura criminal, por lo que son conocidas en terreno como “oficinas de barrio” (Entrevista 23. Líder juvenil). De hecho, estos grupos trabajan para las oficinas y se articulan con ellas en dos vías: de un lado, mediante la subcontratación de la banda para la ejecución de delitos por parte de la oficina y, del otro, a través de la compra y uso de la franquicia criminal de la oficina por parte de la banda (Callejas, 2012)⁴³.

Este modelo de interacción opera de igual forma “hacia abajo” con las pandillas. En efecto, las bandas y las oficinas no sólo subcontratan a estos grupos para tareas específicas (Personería de Cali, 2013; Defensoría del Pueblo, 2014), sino que también les ofrecen un padrinazgo y respaldo armado a sus acciones:

Si una oficina trabaja con una pandilla, y otra oficina se mete con esa pandilla, entonces la primera oficina respalda a la pandilla y se inicia una guerra entre ambas oficinas. Ya no es sólo una pelea de bandas o pandillas, es una guerra de oficinas y pandillas, de todo. (Entrevista 31. Líder juvenil)

Además, los GVO del nivel intermedio expresan este padrinazgo mediante la entrega de armas y la “formación” de pandilleros conforme a sus intereses:

Las bandas subcontratan a las pandillas; pero no sólo eso, también le prestan un entrenamiento a sus miembros y los adaptan a las necesidades específicas de las bandas; les enseñan roles especializados como el robo de celulares, el fleteo, el sicariato, la microextorsión, etc. Las bandas y las pandillas crean ‘cadenas productivas’ del delito y la violencia. (Entrevista 30. Funcionaria)

Para finalizar, cabe destacar tres aspectos que tienen en común los GVO tanto del nivel bajo como del intermedio. En primer lugar, en la base de la estructura criminal de todas estas agrupaciones están los jóvenes (Callejas, 2012). De hecho, la mayoría de los integrantes de las bandas y oficinas son expandilleros:

(...) las oficinas se dedican a reclutar a los pelados de las pandillas para que cometan asesinatos y realicen otras tareas. En el Distrito de Aguablanca, la Comuna 18 y la Comuna 1 reclutan pelados de 16 años para atrás, porque saben que por ley si los cogen tienen que soltarlos de una. (Entrevista 30. Funcionaria)

Las bandas usan a los pandilleros y los terminan convirtiendo en su brazo armado. (Entrevista 35. Funcionario)

En estas organizaciones las mujeres también tienen un rol central:

Son las que andan armadas, cuando llega la Policía y requisita a los pelados de las bandas, las mujeres esconden las armas; les llaman ‘La Bodega’. Son los correos: llevan drogas, armas y municiones. Son ‘ganchos’ o ‘pican arrastre’, es decir, atraen a los hombres de un grupo rival a un sitio para ser asesinados o golpeados por una banda. Hay mujeres gatilleras, ‘que bolean balín’. Son mujeres sicarias. (Entrevista 31)

Otro aspecto que tienen en común los grupos del nivel bajo e intermedio es el tipo de relación que sostienen con las comunidades bajo su influencia. En los barrios afectados por la criminalidad es posible observar dos formas diferentes en que los pobladores se relacionan con estos grupos: por un lado, a través del miedo, dado el alto nivel de afectaciones y desmanes que sufren por cuenta de la violencia de las pandillas, las bandas y las oficinas (Personería de Cali, 2013). Por otro lado, con cierta aceptación; algunos sectores de la población son permisivos y tolerantes frente a las acciones de estos grupos (Entrevista 44. Funcionaria).

En parte, los valores ambivalentes de la comunidad frente a los GVO tienen que ver con tres factores: (1) gran parte de quienes integran estos grupos son familiares o conocidos de los habitantes⁴⁴ (Entrevista 44. Funcionaria); (2) algunos habitantes están relacionados directa o indirectamente con las economías criminales que dinamizan estos grupos y dependen materialmente de que ellas sigan funcionando (Entrevista 30. Funcionaria); (3) algunas personas consideran que los GVO les proveen seguridad al barrio (Entrevista 23. Líder juvenil)⁴⁵.

Finalmente, también es similar la respuesta de la Fuerza Pública a los diferentes grupos relacionados con la violencia juvenil en el nivel bajo e intermedio. En campo se señaló como principal problemática la participación de policías en hechos de corrupción relacionados con el microtráfico:

(...) la Policía es la más corrupta, llega a la olla y dice: 'bueno vengo por la tarifa'. Le dicen a los jíbaros cuándo es el allanamiento. La otra vez cogieron a un gamín, lo llevaron a una cancha y le dijeron: '¿se quiere ir?, denos 2 millones y llévese su droga'. El gamín se fue. (Entrevista 31. Líder juvenil).

Así mismo, se reportó que agentes estatales estarían relacionados con la entrega de armas a integrantes de las pandillas y las bandas:

La Policía te coge armado, te coge el arma y te lleva preso (...) pero luego te llevan a un sitio solo y te dice: 'por esa arma le van a meter 10 años, venga y le proponemos un negocio, nosotros nos quedamos con el arma, usted se va y no pasa nada'. Luego cogen esa misma arma y se la venden a la banda rival. Fuera de eso luego venden las municiones. (Entrevista 31. Líder juvenil)

En suma, los pobladores de estos barrios desconfían de la Fuerza Pública y no denuncian ante las autoridades las actividades de los GVO, dada la percepción que tienen de la entrega de información a bandas por

parte de agentes estatales⁴⁶ (Entrevista 42. Líder juvenil; Entrevista 44. Funcionaria).

Las falencias en la atención estatal a los problemas de violencia juvenil e inseguridad también están relacionadas con una limitada capacidad de los organismos de seguridad en Cali.

Los cuadrantes no funcionan allí donde las pandillas y las bandas delincuenciales tienen un poder tan fuerte, y donde no hay personal y dotación suficiente. Frente a un grupo de jóvenes con armas largas, automáticas, granadas y con conocimiento de la zona, donde cualquiera desde cualquier punto puede dispararle a un policía sin ser identificado, es muy difícil que dos policías se enfrenten con unas ‘pistolitas’. En esas circunstancias a los policías les quedan tres opciones: arriesgarse a que los maten; hacerse los ciegos, sordos y mudos; o convertirse en corruptos. (Entrevista 30. Funcionaria)

4.2.1.3. Nivel alto: las FARC, GPDP y grupos narcotraficantes

En el nivel alto de la estructura criminal se encuentran los GPDP, los grupos al servicio del narcotráfico y, marginalmente, las FARC. Los primeros han sido los principales protagonistas de las problemáticas que afectan la seguridad de Cali, incluyendo el recrudecimiento de la violencia juvenil, durante este período.

Esto se debe, primordialmente, a la competencia entre Los Rastrojos y Los Urabeños por el dominio de Cali para convertirla en un centro de operaciones de sus actividades, y en un lugar de enlace entre dos dimensiones distintas de la criminalidad (Defensoría del Pueblo, 2014; Arévalo y Guáqueta, 2014).

Ambos GPDP se han insertado en dos negocios criminales con conexiones internacionales (Arévalo y Guáqueta, 2014): (1) el contrabando transnacional de diversa variedad de productos que entran por el Pacífico a través del puerto de Buenaventura; y (2) el tráfico de drogas, a través de la participación en las fases intermedias de la cadena controlada por los carteles mexicanos, en específico la compra de base de coca, la producción de clorhidrato y la custodia y embarque de los narcóticos que se envían hacia Centroamérica.

Estas actividades, en especial el narcotráfico, tienen una conexión con la criminalidad local de Cali. Dada la pérdida de importancia de las

organizaciones colombianas en la cadena internacional del narcotráfico, para los GPDP ha tomado mayor importancia el control y la ampliación del mercado interno de drogas en la ciudad (Personería de Cali, 2013; Arévalo y Guáqueta, 2014). Además, son importantes para estos grupos otras fuentes de rentas ilegales como la extorsión y la venta de seguridad (Defensoría del Pueblo, 2014).

Sin embargo, como se aclaró anteriormente, la disputa por el dominio de estos mercados criminales no la ejercen directamente estos grupos sino a través de las bandas criminales, las oficinas de cobro y las pandillas. Según la Defensoría del Pueblo (2014), los GVO del nivel bajo e intermedio son funcionales a los intereses de los GPDP, en tanto les permiten controlar territorios, poblaciones y actividades criminales de una forma relativamente “económica” y “reemplazable”.

Estos dos testimonios ilustran la forma como los GPDP establecen una cadena criminal con las bandas y las pandillas en los territorios, conforme a sus intereses:

El narcotráfico da droga y pide a las bandas que la distribuyan en el territorio. El negocio lo maneja la banda, los jibaros. Se monta una estructura para controlar ese negocio. Se distribuyen las ganancias y la banda se encarga de blindar el mercado: nadie más puede entrar a él. Ellos se encargan de tener blindado al consumidor que se abastece. Por su parte, los ‘paras’ abastecen a las bandas con armas para que puedan amedrentar a sus enemigos. (Entrevista 44. Funcionaria)

En la Comuna 6 y el Distrito de Aguablanca, Los Urabeños y Los Rastrojos tienen personas que controlan la ciudad. Por ejemplo, el ‘Anticristo’ lideraba el microtráfico en la ciudad y tenía un duro en cada barrio que, a su vez, mandaba sobre las personas que manejan el negocio. En Petecú habían 3 duros que manejaban el negocio, recibían órdenes desde arriba. Por eso es más fácil hablar con los de arriba para controlar a esos grupos. (Entrevista 38. Líder juvenil)

En efecto, los GPDP han transformado la dinámica del conflicto de los GVO juveniles. Primero, ellos han entregado dinero, armas, entrenamiento y combatientes a bandas y pandillas, incrementando la capacidad de estos grupos para ejercer violencia (Defensoría del Pueblo, 2014).

Estos grupos llegaron a Cali y comenzaron a proveer armas y medios de transporte a las pandillas. Con la entrada de las

bacrim a la ciudad cambia la dinámica. Los grupos ya no amenazan o corretean a quien cruza la frontera, ahora los matan. Con estos grupos hay herramientas más contundentes de control territorial, que hacen más desgarradora y violenta la solución de los conflictos. (Entrevista 38. Líder juvenil)

Segundo, la alineación de bandas y pandillas a Los Urabeños o Los Rastrojos ha impactado la territorialidad de los barrios con mayores niveles de la violencia. Dado que los grupos locales actúan como una extensión de los GPDP, la disputa por el territorio ya no obedece directamente a los intereses de los grupos locales sino al proyecto de dominio de la ciudad de los GPDP (Defensoría del Pueblo, 2014).

La intensidad del conflicto obedece, además, a cuatro factores: (1) la forma como han incursionado Los Urabeños en Cali; este grupo tiene “(...) la mayoría del control territorial de la ciudad por lo cual han estado acabando con las oficinas, ya que si estos no se les unen, si no les dan el negocio y las armas entonces los desaparecen” (Entrevista 38. Funcionaria). (2) Las guerras internas dentro de estos grupos por la captura de algunos de sus jefes (Arévalo y Guáqueta, 2014). (3) Las dificultades de ambos grupos por dominar por completo a las bandas y oficinas de la ciudad, algunas de las cuales se resisten a la presencia de los GPDP en sus zonas de influencia (Entrevista 30. Funcionaria). (4) La presencia de Los Buenaventureños en algunas comunas, lo que aumenta el número de GPDP en disputa por la ciudad (Arévalo y Guáqueta, 2014).

En otras ciudades, como Medellín, hay pocos grupos armados muy bien posicionados y hegemónicos que organizan a las bandas y las pandillas. Por eso los niveles de disputa y vendettas son bajos. En cambio en Cali hay tres grupos grandes, Los Urabeños, Las Águilas Negras y Los Rastrojos o Buenaventureños, que han llegado a enfrentarse. Además, el nivel de outsourcing ha crecido, y existen por ello bandas súper reconocidas y otras emergentes trabajando en el territorio. Algunas bandas emergentes quieren dejar la segunda liga y quieren subir a la primera liga, quitándoles terreno a las bandas consolidadas. Todo esto hace que el nivel de enfrentamiento y violencia en Cali sea mucho más alto que en ciudades como Medellín o Bogotá. (Entrevista 30. Funcionaria)

Para finalizar, la “ruta de la criminalidad” de los jóvenes agresores en Cali llega hasta estos grupos: muchos jóvenes de pandillas “mercenarias” o “criminales” son reclutados por oficinas, en donde reciben orientación en la comisión de delitos de alto impacto y luego ingresan a los GPDP (Personería de Cali, 2012)⁴⁷.

Al parecer, en la mayoría de los casos, los jóvenes que inician en actividades delictivas buscan ascender en la estructura criminal de forma voluntaria, siguiendo un modelo de “éxito” en el mundo criminal, en el que es necesario posicionarse como el “duro” de la banda que controla el barrio, para así comenzar a relacionarse con narcotraficantes o paramilitares, y terminar siendo la “mano derecha” de un jefe de un GPDP (Callejas, 2012). Lo anterior se retrata en el siguiente testimonio de un pandillero citado por la Personería de Cali (2012): “Uno se relaciona tanto con la delincuencia que el sueño de uno es pertenecer a una oficina grande, si no existe la posibilidad de salirse de esto” (p.21”).

Recuadro 5. La injerencia de las FARC en la violencia juvenil en Cali

Milicias de las FARC hacen presencia con un bajo perfil en zonas periféricas de la ciudad (Defensoría del Pueblo, 2014). Este grupo ha subcontratado a bandas de Cali para la ejecución de delitos en esta y otras ciudades del país. Además, las FARC tienen vínculos con Los Urabeños para entrar droga proveniente del Pacífico y el norte del Cauca y para reclutar jóvenes que son llevados a áreas rurales (Entrevista 30. Funcionaria).

4.2.2. Situaciones críticas de violencia contra jóvenes

En Cali se observan, al menos, seis situaciones críticas de violencia contra jóvenes⁴⁸: (1) asesinatos en el marco de la violencia entre pandillas y bandas criminales; (2) restricciones a la movilidad; (3) reclutamiento forzado de jóvenes y uso ilegal de menores de edad por parte de los GVO; (4) violencia sexual contra las mujeres jóvenes y las niñas ejercida por integrantes de GVO; (5) amenazas a los líderes juveniles; y (6) amenazas y asesinatos en el marco de acciones de limpieza social.

4.2.2.1. Asesinatos en el marco de la violencia entre los GVO del nivel bajo e intermedio

Los hechos violentos que más afectan a los jóvenes de Cali, agresores o no, son los asesinatos, en su mayoría, ocurridos en el marco de los enfrentamientos y la violencia de las pandillas, las bandas criminales y las oficinas de cobro.

Para comenzar, cabe destacar que Cali tiene una de las tasas de homicidios de jóvenes más altas del país. En efecto, según la Policía Nacional, entre 2005 y 2012 la ciudad mantuvo una tasa superior a 100 jóvenes asesinados por cada cien mil habitantes. La tendencia de la tasa de homicidios de

jóvenes cayó entre 2005 y 2008 de 164 a 100, y luego volvió a incrementarse desde el 2009 hasta el 2012 de 119 a 142; los años de mayor intensidad del conflicto por el control de la ciudad entre los GPD. En el año 2012, la tasa de homicidios de jóvenes de Cali superó con creces las de los casos de estudio y la del país⁴⁹. La participación de los jóvenes asesinados en Cali entre el 2005 y el 2012 en el total de jóvenes asesinados en el país, además, alcanzó el 12,3% (7.480 de 60.446). En suma, lo anterior evidencia que Cali es la ciudad de estudio con la problemática más grave de violencia juvenil.

Una parte significativa de estos asesinatos están relacionados con la violencia entre los GVO del nivel bajo e intermedio. Así, para el Observatorio Social de Cali (2014), los homicidios de jóvenes se concentran en las comunas 13, 14 y 21 (Distrito), 1 y 20 (Ladera) y 6 (zona nororiental), áreas donde se observa una fuerte problemática de pandillerismo y presencia de bandas. Además, según el Observatorio (2014), del total de menores de edad asesinados en Cali en el 2012 (225 de 1.843 personas asesinadas), el 39% de los casos estaban relacionados con pandillas y el 21% con venganzas; porcentaje que se incrementó en el 2013: del total de menores asesinados ese año (248 de 1.939 personas asesinadas), el 47% de los casos estaban relacionados con pandillas y el 25% con venganzas.

En particular, los asesinatos de jóvenes están relacionados con cuatro escenarios protagonizados por bandas y pandillas (Entrevista 30. Funcionaria): (1) los enfrentamientos, balaceras e incursiones sicariales entre grupos rivales; hechos que afectan por igual a integrantes de los grupos, jóvenes no agresores y demás pobladores que quedan en medio del fuego cruzado. (2) La transgresión de fronteras invisibles impuestas por estos grupos. (3) Las disputas y vendettas relacionadas con el microtráfico de drogas, en la que se ven afectados jóvenes adictos o involucrados en el negocio⁵⁰ (4) Las riñas al interior de estos grupos.

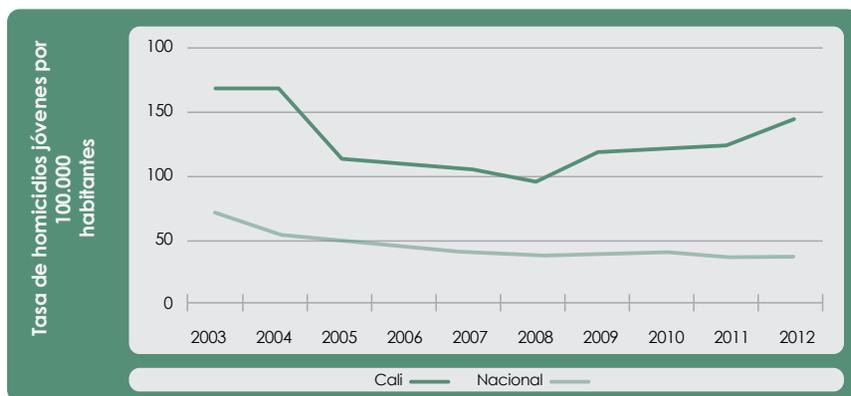


Figura 3. Tasa de homicidios de jóvenes por 100.000 habitantes

Fuente: Datos de la Policía Nacional de Colombia, procesados por CERAC

4.2.2.2. Restricciones a la movilidad

Otro tipo de violencia que afecta gravemente a los jóvenes de Cali son las restricciones a la movilidad (fronteras invisibles) que establecen las pandillas, bandas y GPDP. Estos hechos vulneran la movilidad, la seguridad y la integridad de los jóvenes y demás pobladores de las zonas de influencia de los GVO.

Por lo general, las fronteras invisibles operan en los límites barriales; los grupos que las establecen prohíben la entrada a ciertos territorios (con amenaza de muerte) a grupos o a personas que consideran un riesgo potencial frente a sus intereses. Con el tiempo, esas líneas pasan a ser reconocidas por la comunidad (Defensoría del Pueblo, 2014). En el 2013, la Policía identificó fronteras en los barrios como Marroquín, El Vergel, Petecuy, Mojica, entre otros en el Distrito; y entre Siloé y Terrón Colorado en la zona de Ladera (Violencia por 'fronteras invisibles' no da tregua en Cali, 2013).

Sin embargo, en barrios como El Vergel y Siloé la situación es mucho más crítica puesto que allí tienen presencia un alto número de GVO. Entonces, la competencia por el dominio de estos barrios fragmentan aún más el territorio: las restricciones a la movilidad no sólo operan en los límites barriales sino también entre sectores e, incluso, entre cuadras (Personería de Cali, 2012; Entrevista 42. Líder juvenil). Así, una funcionaria señalaba que los jóvenes de estos barrios viven en una situación similar al confinamiento forzado (Entrevista 30).

Por último, es necesario señalar que las fronteras invisibles también han limitado el acceso de algunos jóvenes a servicios públicos como la educación y a programas sociales del Estado (Defensoría del Pueblo, 2014).

4.2.2.2.1. Reclutamiento ilegal

El reclutamiento forzado de jóvenes, y la vinculación y uso ilegal de menores de edad por parte de GVO es otra situación crítica de violencia en Cali. Los Urabeños, Los Rastrojos y las FARC son los principales responsables de estos hechos (Entrevista 40. Exagresor; Entrevista 42. Líder juvenil); aunque, según la Defensoría del Pueblo (2014), en determinados casos también reclutan jóvenes grupos narcotraficantes, oficinas, bandas y pandillas.

Los GVO usan dos estrategias para el reclutamiento: (1) amenazas directas a las víctimas o a sus familias, (2) la entrega de dinero y bienes a los jóvenes (Defensoría del Pueblo, 2014). La mayoría de casos conocidos por las autoridades se registran en las comunas 1, 13, 14, 18 y 20 (Defensoría del Pueblo, 2014). Según la Personería de Cali (citada en Arévalo y Guáqueta,

2014), en la zona de Ladera se han reclutado cerca de 300 jóvenes; 70 en la comuna 20 y 232 en la comuna 18 por Los Urabeños, Los Rastrojos y las FARC.

4.2.2.2. Violencia sexual

En las zonas de mayor control territorial por parte de los GVO se identificaron casos de violencia sexual en contra de mujeres jóvenes y niñas.

Entre las ciudades de interés, Cali reporta unas de las cifras más altas de agresiones sexuales a mujeres jóvenes (menores de 25 años) conocidos por Medicina Legal, después de Bogotá y Medellín. Entre el 2005 y el 2012, se reportaron 3.074 casos y la tasa de mujeres jóvenes agredidas sexualmente por cada 100.000 mujeres jóvenes se incrementó de 109 a 144 durante dicho período.

En particular, es preocupante la situación de las niñas menores de 14 años en Cali. Según la Fiscalía (citada en la Personería del Pueblo, 2014, p.36), entre enero y agosto de 2013 se reportaron 705 casos de delitos sexuales contra mujeres en la ciudad, de los cuales el 57% (402 casos) están relacionados con hechos que afectan directamente a niñas menores de 14 años; acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía infantil y explotación sexual con menores de 14 años.

Si bien no es posible generalizar ni relacionar directamente las acciones de los GVO que hacen presencia en Cali con este tipo de hechos, sí se ha conocido que en determinados casos los integrantes de las bandas y las pandillas participan en eventos de violencia sexual contra los jóvenes y las niñas. En ese sentido, la Personería de Cali (2012) denunció que las pandillas “mercenarias” y “criminales” de la ciudad participan en actividades criminales como el proxenetismo, el tráfico de personas y la inducción a la prostitución de mujeres jóvenes en la ciudad.

Adicionalmente, se han reportado unos casos contados de violaciones sexuales contra mujeres jóvenes por parte de pandilleros e integrantes de bandas, en el marco de dinámicas de retaliación de estos grupos por presuntas denuncias de los habitantes a la Fuerza Pública (Defensoría del Pueblo, 2014) o en el cobro de extorsiones en zonas en las que estos GVO tienen un fuerte dominio territorial.

En los asentamientos o lugares más marginales y vulnerables, en donde existe un mayor control por parte de las pandillas y las bandas delincuenciales se han reportado casos de violencia sexual contra mujeres jóvenes y niñas por parte de

los integrantes de estos grupos. Ellos hacen llamar a estos hechos ‘servicio sexual obligatorio’, violaciones o servicios sexuales forzados, y lo realizan cuando los miembros de una familia o negocio no pueden pagar las extorsiones o deudas con estos grupos armados. En esas circunstancias, luego de llevarse enseres o bienes materiales, los grupos abusan de las mujeres de esas familias. Este caso se reportó en el barrio Brisas de los Comuneros (del Distrito de Aguablanca), en el marco de la desarticulación de una de las bandas que allí operan. (Entrevista 30)

4.2.2.5. Amenazas a líderes juveniles

En terreno se reportaron amenazas de jóvenes que tienen un perfil de liderazgo comunitario y social por parte de los GVO en zonas gravemente afectadas por la criminalidad como los asentamientos ilegales:

Se han presentado amenazas de muerte a líderes sociales y comunitarios, e integrantes de organizaciones sociales que participan en iniciativas encaminadas a trabajar por el bienestar de las comunidades, en particular, en el asentamiento Cinta Larga. Estas acciones limitan y restringen el trabajo de las organizaciones. Inclusive yo he recibido amenazas por mi labor en la comunidad desde la Junta de Acción Comunal (Entrevista 42. Líder juvenil).

En ese sentido, líderes juveniles de la zona de Ladera y del Distrito de Aguablanca reportaron haber recibido amenazas por parte de desconocidos relacionadas con el ejercicio de sus acciones (Entrevista 31; Entrevista 23).

4.2.2.6. Amenazas y asesinatos en el marco de la limpieza social

Otros hechos violentos que afectan a los jóvenes de zonas marginales de Cali son los asesinatos y las amenazas en el marco de las campañas de limpieza social.

Aunque en terreno se reportó que estas acciones son menos frecuentes frente a años anteriores, según la Defensoría del Pueblo (2014: 5) se han reportado nuevos casos de amenazas por medio de panfletos que anuncian acciones de limpieza social contra personas vulnerables en los barrios Petecuy⁵¹, La Casona, El Florialio, Avenida Paso Ancho, Ciudad Córdoba, El Vallado y Antonio Nariño.

4.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil

4.3.1. Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada

En general, se identifican 13 factores de riesgo asociados de forma significativa al incremento de la vulnerabilidad de los jóvenes de Cali frente a la posibilidad de vincularse a los GVO. Con el propósito de facilitar su análisis, se plantean cuatro modelos explicativos de la forma como operan y se relacionan estos factores.

4.3.1.1. Modelo I

En primer lugar, tienden a estar en un nivel alto de riesgo de vincularse a la violencia organizada aquellos jóvenes que tienen que asumir el rol de proveedores de recursos en sus hogares, cuando ellos viven en contextos muy marginales, en donde hacen presencia y tienen dominio territorial GVO y provienen de familias disfuncionales, en las que los padres no logran insertarse en el sistema laboral.

Un lugar paradigmático en donde se presentan estas características son los asentamientos ilegales y sus alrededores⁵². Como se mencionó anteriormente, gran parte de la población desplazada por la violencia y migrante que llega a Cali se concentra en este tipo de lugares, caracterizados por altos niveles de pobreza, una desconexión casi total de la ciudad en términos socioeconómicos, una muy limitada provisión de servicios estatales, y la presencia de GVO que toman estos territorios como zonas de refugio (Arévalo y Guáqueta, 2014).

La mayoría de las familias que se asientan en estos territorios tienen varias características (Entrevista 30. Funcionaria; Entrevista 42. Líder juvenil): en lo demográfico, son familias extendidas, afrocolombianas, que vienen del Pacífico, y se ubican en el territorio a partir de relaciones de parentesco y vínculos simbólicos regionales; en lo socioeconómico, llegan a conformar hogares con altos niveles de hacinamiento, donde los adultos encuentran serias dificultades para insertarse laboralmente, puesto que solo tienen experiencia en oficios rurales; y en la estructura familiar, no siempre cuentan con la figura del padre.

Estas familias tienden a ser disfuncionales y obligan a los hijos desde temprana edad (10 a 15 años) a tomar el liderazgo en la provisión de los bienes del hogar:

La migración opera como un factor de riesgo. El 50% ó 60% de las personas de los asentamientos son niños y jóvenes. En este tipo de contextos es frecuente encontrar hogares desintegrados y disfuncionales, donde los jóvenes viven con padres con dificultades para incorporarse en la economía de la ciudad o a veces viven con padres de segunda generación, tíos, abuelos, familiares o conocidos, con poca supervisión. Las personas de los asentamientos informales son sumamente vulnerables: sólo conocen actividades económicas rurales (casa, pesca, cultivos, etc.) y viven del rebusque en las zonas urbanas. Son los desahuciados de la economía, los que quedan completamente excluidos de ella. Los jóvenes de estos hogares son empujados a trabajar desde los 10 ó 15 años. (Entrevista 30. Funcionaria)

Sin embargo, los jóvenes que son presionados a buscar trabajo difícilmente logran insertarse laboralmente. Según una funcionaria, la ciudad no ha implementado una política pública que le permita brindar trabajo formal a las poblaciones migrantes y desplazadas que llegan a Cali, ni está preparada para dar respuesta a la creciente demanda de empleo juvenil en la ciudad (Entrevista 30). Además, estos jóvenes suelen no tener acceso a educación ni tampoco tienen formación en ningún oficio laboral, lo que les resta opciones para obtener empleo (Entrevista 44. Funcionaria). Así mismo, en muchos casos, la estigmatización de la cual son objeto las poblaciones de las zonas de asentamiento les cierra toda posibilidad de conseguir empleo o ser capacitados (Defensoría del Pueblo, 2014).

Por el contrario, estos jóvenes tienen mayores posibilidades de insertarse en las cadenas de actividades económicas informales y, en algunos casos, ilegales que se desarrollan en este tipo de territorios y de las que depende una parte importante de la población: venta de bienes hurtados⁵³, comercialización de artículos de contrabando, actividades de rebusque, empleos informales de muy baja calidad, etc. (Entrevista 30. Funcionaria; Defensoría del Pueblo, 2014).

En ese tipo de actividades tienden a tener una alta injerencia los GVO. Es necesario recordar que los asentamientos y, en ocasiones, los barrios completos donde ellos se establecen, son territorios controlados por pandillas, bandas y GPDP. Estas áreas son similares a las “zonas de retaguardia” de los grupos del conflicto: un lugar con baja presencia estatal; propicio para el tránsito y refugio de combatientes, armas o droga; con una población muy excluida, de donde es posible reclutar nuevos integrantes (Arévalo y Guáqueta, 2014). En ese contexto, los grupos favorecen, dinamizan o, incluso, protegen estas actividades.

Además, en estos asentamientos se forman microeconomías ilegales: las tiendas se abastecen con “reciclaje”, es decir, productos robados y contrabando, piezas robadas de motos, carros, celulares, etc. Esta situación obliga a las personas involucradas en estos negocios a tener contacto con bandas, para que provean, compren o cuiden estos tipos de actividades, y para que nos los saquen del territorio. Por cuenta de esto la gente toma partido. Las bandas delincuenciales que entran a los barrios rompen el tejido social: obligan a la gente a decidir si están con ellos o no. (Entrevista 30. Funcionaria)

Una vez los jóvenes se involucran en estas cadenas, es más factible que acepten las ofertas de involucramiento en la violencia que les ofrecen los GVO:

Mientras tanto está el monstruo parado en la esquina, en grupo, que sí le ofrece alternativas económicas al pelado. Le dice ‘tome este fierro y consiga lo que necesita, y me da luego la mitad’. Después de eso el pelado ya hizo su primer robo, luego aprende y tenemos al qué ampón con el tiempo. (Entrevista 31. Líder juvenil)

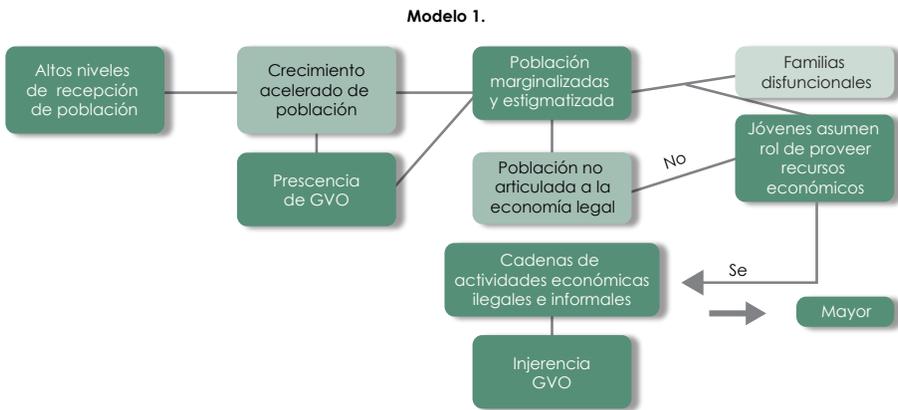


Figura 4. Modelo I - Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada

Fuente: elaborado por CERAC

4.3.1.2. Modelo II

En entornos con serias problemáticas de seguridad, los jóvenes pueden ser más propensos a vincularse a GVO cuando entablan relaciones con pares

criminales, y si perciben una amenaza contra sus vidas en el territorio o encuentran en la violencia una oportunidad para resolver sus conflictos personales.

En efecto, una de las razones que puede estar relacionada con la decisión de los jóvenes a pertenecer a GVO es la búsqueda de protección frente a un entorno hostil. Según la Defensoría del Pueblo (2014), en zonas con graves problemas de criminalidad y violencia⁵⁴, “No pertenecer a una pandilla, en algunos de estos barrios es un factor de riesgo en sí mismo” (p.21). Frente a lo anterior, es ilustrativo el testimonio de un pandillero entrevistado por la Personería de Cali (2014):

En este barrio si usted no participa de una pandilla no es, por ejemplo, aquí operan los lecheros y cuando salga a coger el bus lo van a atacar, así que le toca ser de la banda. Se vinculan por fuerza porque las fronteras lo obligan (...) Para sobrevivir toca cuidarse uno mismo la espalda, entre compañeros. (p. 21)

Así mismo, los jóvenes pueden ver a los GVO como un medio para resolver de forma violenta sus conflictos personales (Entrevista 23. Líder juvenil; Entrevista 33. Funcionario). A manera de ejemplo, un líder⁵⁵ relató cómo en su adolescencia hizo parte de una pandilla y resaltó que, si bien tenía todos los factores de riesgo para involucrarse en este grupo (ausencia de padres, entorno conflictivo y pares violentos), el hecho decisivo para él fue la muerte violenta de su hermano: quería cobrar venganza y halló en la pandilla una oportunidad para hacerlo.

En ese sentido, se identificó que en la ciudad es común que jóvenes reciban “herencias violentas”, es decir, que asuman como suyos conflictos de sus familias (p.e. la muerte de un integrante de ella), lo que los llevaba a buscar venganza y, por esa vía, a reactivar los ciclos de violencia (Entrevista 35. Funcionario).

En ambos casos, las relaciones con pares criminales favorecen la vinculación de los jóvenes a GVO, al proveerles los medios para contactarse con estos grupos.

En particular, este modelo opera mucho mejor en los entornos sociales con graves problemáticas de convivencia y seguridad. Estas zonas se caracterizan por la presencia de altos niveles de conflictividad social y problemas de convivencia, que son asumidos muchas veces por los jóvenes, y que son fácilmente susceptibles de ser tramitados de forma violenta, dada la proliferación de armas de fuego, y la presencia de GVO⁵⁶ (Entrevista 25. Funcionaria; Entrevista 38. Funcionaria).

Tienden a ser vulnerables a optar por ser parte de GVO los jóvenes que buscan satisfacer ciertos estándares de vida a través de la violencia y la criminalidad, cuando afrontan la siguiente confluencia de factores: tiempo libre no ocupado en actividades productivas, familias disfuncionales y pares criminales.

Varias de las personas entrevistadas señalaron que, al igual que en Medellín, los jóvenes de Cali están expuestos a una “cultura de la ilegalidad”, relacionada con la influencia del narcotráfico en la ciudad, en la que priman dos valores: el consumo de bienes y servicios costosos y la pérdida del valor de la vida. A juicio de dichas personas, algunos jóvenes se vinculan a GVO para acceder a este estilo de vida⁵⁷:

Los jóvenes adoptan parámetros culturales de la mafia: buscan comprar artículos de lujo como motos, carros, entre otros; y pierden el valor de la vida, saben que van a morir jóvenes, entonces buscan dejar rápido “la pinta” (un hijo). (Entrevista 30. Funcionaria)

El microtráfico funciona como un paraestado: resulta mejor que un joven ingrese a estas bandas porque hay mayor oportunidad de acceder a recursos y tener estatus social. Este paraestado funciona más fácil que el Estado y la sociedad, le ofrece al joven armas, motos, figuras paternas, resultados económicos excelentes, poder de hacer lo que se les dé la gana. (Entrevista 42. Líder juvenil)

En ese contexto, los demás factores operan como una cadena de influencias que facilitan la decisión de los jóvenes a favor de la violencia organizada. Es previsible que los jóvenes más vulnerables sean aquellos que carecen de un proyecto de vida, o que incluso hayan perdido el valor de la vida, (Entrevista 25. Funcionaria; Entrevista 27. Funcionaria) y que provengan de familias que no operan como entornos protectores (Entrevista 23. Líder juvenil; Entrevista 31. Líder juvenil).

Este último factor es determinante puesto que los jóvenes con familias disfuncionales, en donde los padres no son un referente positivo de comportamiento ni supervisan las actividades de sus hijos, son proclives a no ocupar bien su tiempo libre y a construir relaciones de afinidad con criminales.

En ese sentido, tanto el exceso de tiempo libre como las relaciones con pares criminales facilitan el contacto de los jóvenes en riesgo con GVO. En

cuanto a lo primero, un líder juvenil señalaba, “El pelado está ahí parado en la esquina y ve cómo matan a uno, cómo alquilan un arma, cómo las ollas le pasan la droga a otro para que venda” (Entrevista 31). En cuanto a lo segundo, un funcionario daba un ejemplo de cómo opera este factor con los integrantes de barras violentas de fútbol: “Muchos jóvenes que hacen parte de barras están en grave riesgo, dado que estos grupos son caldo de cultivo para pandillas y bandas” (Entrevista 33).

4.3.1.4. Modelo IV

Los jóvenes que pertenecen a familias cuyos padres o integrantes son permisivos frente a la criminalidad y la violencia son vulnerables a hacer parte de GVO.

En su estudio sobre violencia juvenil en Cali, Lina Solarte (2010) encontró que los jóvenes agresores que ella había entrevistado hacían parte de familias en las que existía cierta aceptación por lo ilegal y donde alguno de sus integrantes tenía antecedentes criminales (como el padre, tío, abuelo o hermano). A su juicio, esa relación tiene que ver con la importancia que tiene la familia como espacio primario de socialización y de aprendizaje de valores (Solarte, 2010).

Así, en campo se reportó que algunas familias facilitaban la entrada de los jóvenes a los GVO, por medio de tres vías: (1) la permisibilidad de los padres frente a la participación o el reclutamiento de sus hijos en GVO, así los padres no estuvieran relacionados con estos grupos⁵⁸ (Entrevista 32. Funcionaria). (2) La imitación de los jóvenes del modelo de comportamiento que tienen en familiares violentos o criminales, así los padres no los indujeran directamente a estas prácticas⁵⁹ (Entrevista 42. Líder juvenil). (3) La inducción directa de los jóvenes en actividades criminales por parte de los padres⁶⁰ (Entrevista 25. Funcionaria).

4.3.2. Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada

En términos de protección, se identificó que los jóvenes beneficiarios de iniciativas de prevención de la violencia o de grupos y redes juveniles tienden a ser más resilientes frente a la decisión de involucrarse en la violencia organizada.

En ese sentido, Solarte (2010) encontró que uno de los factores decisivos en la trayectoria de vida de los jóvenes no agresores que ella entrevistó en su trabajo de campo en Cali fue la participación en organizaciones o grupos juveniles, desde muy temprana edad (de los 7 a los 12 años).

En parte esto se debe a cuatro factores: primero, este tipo de intervenciones proveen alternativas a los jóvenes para la toma de decisiones frente a la violencia y la criminalidad, no sólo para su ocupación productiva del tiempo libre (p.e. en prácticas culturales, deportivas o lúdicas) sino también en términos de formación de habilidades laborales, cuya ausencia en Cali se observa como un factor de riesgo.

Las organizaciones son importantes porque llegan a los sectores donde está el problema y le dan una alternativa a los jóvenes; le ofrecen una oportunidad de trabajo o de una alternativa cultural (baile, música, danza, artesanías, etc.). Nosotros podemos atravesar las barreras invisibles y llegar ahí donde los jóvenes. (Entrevista 31. Líder juvenil)

Otro salvavidas son las organizaciones sociales o los proyectos del Estado. Aunque van dirigidos a pocos jóvenes, se rescatan algunas actividades. Estos ofrecen alternativas para ayudar a las comunidades a tener otro tipo de amigos, conocer cosas que no van a conocer con las bandas; pueden ser libres y cruzar de un barrio a otro o viajar a otra ciudad; y a algunos el liderazgo y el trabajo por la comunidad les gusta. (Entrevista 30. Líder juvenil)

En segundo lugar, los jóvenes que se acercan a organizaciones y grupos sociales tienen la posibilidad de conocer otros referentes de comportamiento y modelos de éxito diferentes a los que les plantea el mundo criminal.

Los pelados que están detrás de uno ven que lo que uno hace sí sirve. Por ejemplo, se enteran que vamos a ir a Francia, o salimos en televisión, o ganamos un reconocimiento y dicen: 'yo también puedo hacerlo'. Ahí usted ya dejó la espina, los pelados luego no le fallan ni a un ensayo o a un taller (...) Esto hace que la gente piense que sí podemos, que no todos los jóvenes en Siloé son vándalos, les gusta robar o consumir droga. (Entrevista 31. Líder juvenil)

En estos escenarios, el efecto demostración tiene un peso significativo para que los jóvenes se involucren en la violencia o para que la descarten:

Es la motivación de los mismos jóvenes la que orienta la decisión de ingresar, en los grupos, cuando observan a los otros divertirse (...) La falta de apoyo económico ocasiona que muchos grupos tengan que ensayar y reunirse en las calles, teniendo esto un efecto secundario, tal vez no esperado, pues,

otros jóvenes los puedan observar e interesarse. (Solarte, 2010, pp.150-151)

Tercero, las organizaciones y las iniciativas de prevención cumplen dos roles fundamentales para incrementar la resiliencia juvenil: contribuyen a la construcción de proyectos de vida y a la formación de una conciencia sobre los costos asociados a la violencia (Entrevista 41. Funcionario; Entrevista 30. Líder juvenil).

Finalmente, este tipo de intervenciones funcionan como entornos protectores de los jóvenes, dado que les construyen confianza, los acompañan y los empoderan como líderes sociales y como sujetos de derechos (Entrevista 23. Líder juvenil).

En particular, algunos jóvenes entrevistados señalaron que la posibilidad de ejercer un liderazgo “positivo” en estos espacios fue un factor decisivo para que ellos hicieran un tránsito de ser agresores a líderes sociales. Así, un líder señalaba que muchos de los jóvenes de su organización también ejercían un liderazgo:

Hay pelados de nosotros que ya están enseñando a otros 5 en la calle y esos, a su vez, les enseñan a otros en sus casas. Usted va a loma y ve 15 pelados a los que les está enseñando un pelado de aquí. Nosotros le llamamos a eso ‘multi-réplica’: gestores que generan nuevos gestores. (Entrevista 31)

4.3.3. Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia

En general, la mayoría de la población que reside en barrios con graves problemas de inseguridad en Cali, como las comunas 13 y 20, están sujetos a la posibilidad de ser víctimas de agresiones físicas, asesinatos, restricciones a la movilidad, etc. Sin embargo, tienden a estar en un nivel especial de riesgo los jóvenes que tienen un perfil de liderazgo, cuando por el ejercicio de sus acciones son percibidos por los GVO como una amenaza para sus intereses estratégicos.

En concreto, el trabajo de los líderes puede ser percibido como un riesgo para los intereses estratégicos de los GVO, si se dirige a ofrecer opciones para el cambio en la trayectoria de vida de jóvenes agresores con roles importantes dentro de las estructuras de estos grupos (líderes de sicarios, vendedores de droga, etc.).

Ser líder social y comunitario puede ser un factor de riesgo en un barrio con presencia de grupos armados (...) si se mete con los intereses de los grupos armados pueden ponerse en una

situación de riesgo, ganan ‘liebres’ si quieren quitarle gente a los grupos. (Entrevista 25. Funcionaria)

Los jefes de los grupos armados se molestan porque tratan de sacar a los jóvenes de las bandas (...) Pero es mucho más complicado tratar de sacar a los niños muy metidos en transportar droga. Les genera un problema a los grupos para sacar la droga. (Entrevista 42. Líder juvenil)

Este factor de riesgo también opera para funcionarios del Estado (jóvenes o no) y otros líderes como los integrantes de las JAC que trabajan con los jóvenes en temas de prevención de la violencia. Según la Defensoría del Pueblo (2014), estas personas tienen que explicarles a los integrantes de las bandas y los GVO el trabajo que van a realizar con los jóvenes, para tener acceso al territorio, siempre y cuando no interfieran con los intereses del grupo. Los líderes entrevistados también señalaban la importancia que tenía para su seguridad recibir una especie de aval por parte de los GVO para el ejercicio de sus labores (Entrevista 42. Líder juvenil).

4.3.4. Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia

Por último, cuando las organizaciones y redes juveniles no son percibidas como una amenaza por parte de los GVO, la pertinencia a este tipo de agrupaciones es un factor de protección de los jóvenes frente al riesgo de ser víctimas de violencia.

Lo anterior tiene que ver con el alto grado de aceptación y reconocimiento que tienen algunas de estas organizaciones entre las comunidades donde operan, e incluso con algunas pandillas y bandas⁶¹ (Entrevista 25. Funcionaria). Ese nivel de legitimidad permite a los jóvenes -que pertenecen a estas organizaciones- tener un mayor nivel de movilidad en el territorio: “Nosotros estamos blindados los que estamos acá, podemos movernos a donde queramos; hay presidentes del barrio que no pueden ir a muchos lados” (Entrevista 42. Líder juvenil).

4.4. Infraestructura de prevención de la violencia juvenil

4.4.1. Caracterización de la infraestructura

Entre el 2008 y la fecha actual, se identificaron un total de 78 iniciativas de prevención de la violencia juvenil que han operado en Cali. La mayoría de estas intervenciones (49) hacen parte de programas o proyectos que funcionan a nivel nacional y 29 tienen un alcance únicamente en la ciudad.

La mayoría de las intervenciones son implementadas por entidades estatales (20 en solitario y 21 en alianzas con otros sectores), seguidas de fundaciones privadas (17 en solitario y 18 en alianzas), agencias u organismos de cooperación internacional (3 en solitario y 11 en alianzas), ONG nacionales e internacionales (7 en solitario y 4 en alianzas) y alianzas entre varios de los anteriores sectores (27).

De igual forma, se registra una superioridad de las iniciativas directas de prevención de la violencia (41) frente a las indirectas (37). En el primer grupo, 32 de las intervenciones orientan sus objetivos al trabajo con las víctimas de la violencia juvenil, 26 apuntan a los posibles victimarios, 1 a las instituciones que regulan esta materia y ninguna a los instrumentos con que se ejerce la violencia.

Los principales ejecutores de las iniciativas son: (1) en el Estado, la Alcaldía de Cali⁶², el ICBF, el SENA, la Policía, el Ministerio de Educación y la Presidencia. (2) En el sector privado se destacan Comfandi, Cedecur, Fanalca, y las fundaciones de empresas como Siderúrgica de Occidente, Gases de Occidente, Fundación Carvajal y Fundación Promigas. (3) Entre la cooperación internacional participan las agencias GIZ de Alemania, AECID de España, USAID de Estados Unidos UNODC, BID y PNUD de las Naciones Unidas. (4) Entre las ONG se destacan la Cruz Roja Colombiana, Save The Childre y la Corporación Juan Bosco.

En cuanto al Estado, la mayoría de las intervenciones indirectas pretenden mejorar las condiciones socioeconómicas de la población vulnerable de Cali (entre ellos los jóvenes) a través de programas de nivelación académica y de formación de competencias para el trabajo. Así mismo, algunas intervenciones apuntan a la prevención del consumo de drogas entre los jóvenes.

Por su parte, la mayoría de las iniciativas directas tienen como objetivo la formación de jóvenes en resolución de conflictos, derechos humanos y cultura de paz; mediante capacitaciones en estos temas complementadas con actividades lúdicas (arte, danza, idiomas, deportes, etc). Varios de estos programas se dirigen a jóvenes en riesgo del Distrito, como por ejemplo Tecnocentro y Oriente Ando.

Otro tipo de iniciativas persiguen el fortalecimiento de entornos protectores (hogares, colegio y comunidades), mediante la prevención de la violencia intrafamiliar o la violencia escolar, o la creación de nuevos entornos protectores, como las Casas de Juventud y los Clubes Juveniles y Prejuveniles.

Finalmente, algunas iniciativas estatales trabajan directamente con jóvenes agresores. En particular, el programa “Cali Sin Pandillas” y las “Casas

Francisco Esperanza” (implementado en alianza con el ICBF y la Fundación Paz y Bien) han contribuido a la rehabilitación y reincorporación social de jóvenes pandilleros, integrantes de bandas e involucrados en el microtráfico, desde una perspectiva de justicia redistributiva y compensación de los daños que causaron a la comunidad.

En cuanto a las iniciativas implementadas por fundaciones priman las de carácter indirecto enfocadas en la formación de habilidades para la generación de ingresos, así como aquellas interesadas en mejorar el acceso a educación superior y la calidad de la educación de los jóvenes más vulnerables. Otras intervenciones apuntan a la ocupación productiva del tiempo libre de los jóvenes mediante la oferta de clases artísticas y deportivas. Finalmente, algunos programas tienen como objetivo la prevención del reclutamiento de jóvenes por parte de GVO.

Por último, las iniciativas impulsadas por agencias de cooperación internacional y ONG hacen énfasis en cuatro tipos de actividades: (1) la capacitación empresarial y de habilidades laborales de los jóvenes; (2) la formación de habilidades artísticas y lúdicas de jóvenes vulnerables como mecanismo para la ocupación del tiempo libre y la mitigación de los riesgos de involucramiento en GVO; (3) el fortalecimiento de las familias, las entidades educativas y las comunidades como entornos protectores de los menores frente a la violencia; y (4) la promoción de la participación y movilización de los jóvenes como líderes y agentes de cambio en sus comunidades y con incidencia en los asuntos públicos.

4.4.2. Efectividad de la infraestructura

La infraestructura de prevención de la violencia juvenil de Cali es limitada en términos de oferta y moderada en cuanto a su eficacia.

Si bien en la ciudad se registra un número considerable de iniciativas en comparación con otros casos de interés, estas son insuficientes para abordar la magnitud de la problemática que se presenta actualmente en Cali. La alta participación de jóvenes en GVO, la transformación de GVO juveniles en organizaciones cada vez más criminales, y la persistencia de serias afectaciones a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de los jóvenes evidencian que este esfuerzo en materia de prevención no ha sido ampliamente efectivo.

A continuación se analizan las principales limitaciones y alcances de las iniciativas implementadas por el Estado, la comunidad, las ONG y el sector privado.

La implementación de la PPJ en Cali inició formalmente en el año 2007 con la creación del Sistema Municipal de Juventud, mediante la expedición del Acuerdo Municipal 226 en la administración Tafur Reyes (2007).

Este marco normativo estableció dos principios rectores de la política: en primer lugar, definió que el sistema de juventud quedara a cargo de la Secretaría de Desarrollo, entidad que lidera la política social del municipio; y, en segundo lugar, hizo énfasis en la creación de instancias encargadas de la articulación de los diferentes actores relacionados con el tema de juventud: (1) gobierno, comunidad, ONG, cooperación internacional y sector privado en la Mesa de Trabajo Conjunto en Juventud; (2) organizaciones de jóvenes en el Foro Permanente de Juventud; y (3) jóvenes que representan a sus pares ante el Estado en el Consejo Municipal de Juventud (CMJ).

Sin embargo, precisamente, en esos dos ámbitos se han presentado las principales fallas en la implementación de las iniciativas estatales de prevención de la violencia juvenil. Para comenzar, si bien en términos normativos la PPJ debería ser liderada por la entidad municipal a cargo del tema social -por lo que se esperaría un mayor énfasis en la prevención y el tratamiento de los problemas de convivencia entre jóvenes-, en la práctica las últimas administraciones han hecho un mayor énfasis en los elementos represivos de esta problemática.

En efecto, la principal apuesta en materia de prevención de la violencia juvenil del presente gobierno Guerrero Velasco (2012 – a la fecha), denominada “Oriente Ando” -que se implementa en el marco de la estrategia de seguridad “Territorios de Integración y Oportunidades”- está siendo acompañada por medidas de corte represivo frente a los jóvenes como los toques de queda de menores de edad que se aplican: en espacios públicos, en zonas verdes, en la calle después de las 11 de la noche, durante los fines de semana, en las comunas con mayor número de participación de jóvenes en delitos como homicidios y lesiones personales, entre otros (Arévalo y Guáqueta, 2014).

Así mismo, la pasada administración Ospina Gómez (2008 – 2011) implementó el programa “Cali Sin Pandillas” que, entre otros aspectos, fue cuestionado por el involucramiento de jóvenes en programas de vigilancia comunitaria en barrios con problemáticas de criminalidad. En la comuna 1 muchos de los jóvenes capacitados vigilaron las calles sin tener el aval de la Alcaldía ni contar con la documentación requerida para esa labor (Callejas, 2012); mientras que en el barrio Potrero Grande (comuna 21), el proyecto de vigilancia comunitaria fue una fuente de rivalidades, problemas de convivencia y conflictos entre grupos juveniles por la defensa y control del territorio (Acosta, et al., 2011).

Hay un tema estructural muy complejo, por lo cual es necesario revisar las condiciones logísticas y técnicas de cada administración. El tema de jóvenes en Cali se aborda desde la Secretaría de Gobierno y no desde la Secretaría Social. Eso quiere decir que los jóvenes son vistos como un problema que hay que recuperar. Desde esa óptica no se puede trabajar el tema de prevención; todo se convierte en un asunto de atención y de rehabilitación de jóvenes pandilleros. (Entrevista 44. Funcionaria)

En parte, el enfoque represivo de la PPJ en Cali es un reflejo de la gravedad de la problemática de la violencia juvenil durante el período de estudio. El tránsito de pandillas a bandas y oficinas, así como la mayor participación de jóvenes en todos los GVO, hace mucho más complejo la atención preventiva del problema:

Con las barras y pandillas sí se puede trabajar en prevención, no es un problema legal trabajar con ellas (...) Con las bandas el tratamiento es más policivo, es un tema que se sale de las manos de las demás autoridades. Ese problema se controla con Fuerza Pública, aunque se pueden sacar algunos muchachos de esas bandas una política enfocada en eso tendría poco impacto. Con los cabecillas identificados o con los comandantes de Los Rastrojos, Los Buenaventureños o Los Urabeños no se puede. Ese es un tema de seguridad mucho más completo que le compete al Gobierno Nacional, a la Policía y el Ejército (Entrevista 35. Funcionario)

En segundo lugar, se observan serias falencias en la articulación de los diferentes actores estatales y de otros sectores relacionados con la implementación de la política pública, lo que tiene un efecto determinante en materia de prevención.

Esto se evidencia en primera instancia entre las entidades del Estado: no hay continuidad en los programas que implementan cada una de las administraciones ni se tienen en cuenta los resultados alcanzados anteriormente (Arévalo y Guáqueta, 2014). Adicionalmente, existen problemas en la articulación de las entidades estatales que participan en la ejecución de la política tanto entre las diferentes dependencias de la Alcaldía⁶³, como entre el nivel municipal y el nacional.

En segunda instancia, el CMJ no ha funcionado de forma efectiva como un espacio de participación formal de los jóvenes. Según un líder esta es una de las principales falencias de la PPJ, puesto que el modelo de

participación ha generado pocos resultados, desgaste en las comunidades y frustración en los jóvenes (Entrevista 23). A su juicio, esto tiene que ver con el escaso acompañamiento estatal a los consejeros, quienes no han sido capacitados sobre el contenido de la política, cómo se implementa y qué beneficios genera.

Finalmente, también se han observado serias limitaciones en la articulación entre el gobierno municipal y los demás sectores que intervienen en la infraestructura de prevención. En parte, esto tiene que ver con el desconocimiento de algunas entidades sobre el trabajo y los resultados alcanzados por las organizaciones de base (Entrevista 25. Funcionaria)⁶⁴.

Ello contrasta totalmente con la visión que tienen muchos líderes sobre la importancia que tiene su trabajo para ofrecerles alternativas de vida a los jóvenes. En todo caso, la visión limitada de algunos funcionarios públicos dificulta la posibilidad que tiene el Estado de articular y aprovechar el potencial que tienen estas iniciativas para fortalecer la resiliencia de los jóvenes frente a la violencia organizada (ver la sección Factores de riesgo y protección).

Para terminar, las entidades estatales tienen falencias de planeación y liderazgo que afectan su trabajo en materia de prevención⁶⁵, en tanto sólo se están implementando las actividades sin desarrollar los procesos que se requieren para la efectividad de las intervenciones (Entrevista 44. Funcionaria).

Así mismo, las iniciativas estatales son implementadas sin recursos suficientes y en muchos casos con poco apoyo por parte de las entidades ejecutoras. Tal es el caso de programas como Cali Sin Pandillas, que, a juicio de Callejas (2012), no logró cumplir las expectativas de los jóvenes, ni proveerles garantías para que pudieran salir de la violencia, por lo que pocas pandillas continuaron inscritas en el programa. En estos casos, las intervenciones estatales terminan promoviendo la frustración y la desconfianza juvenil frente al Estado (Entrevista 23. Líder juvenil).

Una última limitación del Estado tiene que ver con problemáticas estructurales frente a los cuales la PPJ no alcanza a dar los resultados suficientes. A diferencia de casos como Bogotá, donde la política de prevención se ha implementado de la mano con inversión social en las zonas más pobres de la ciudad, en Cali no hay avances significativos en las condiciones sociales de los jóvenes de las zonas más marginales. En ese sentido, una funcionaria consultada concluía:

La política pública no da una respuesta integral a los problemas de la juventud (...) También hay problemas estructurales.

Con un proyecto para 300 personas no se hace nada, es necesario pensar cuáles son las alternativas y las necesidades de los jóvenes. Esto tiene que pasar por: modelos educativos, por qué las escuelas no retienen a los jóvenes, los expulsan y no responden a sus expectativas y necesidades. Empleabilidad. Cali tiene dificultades para absorber a la población juvenil. Cuando fallan estos dos elementos se rompe la cadena: no hay una alternativa clara y el efecto de las iniciativas se vuelve muy limitado ante este contexto tan difícil (Entrevista 44. Funcionaria).

Por su parte, los demás sectores relacionados con la infraestructura de prevención también presentan dificultades para el ejercicio de sus labores.

Uno de los principales retos de las iniciativas comunitarias y ONG en Cali es la sostenibilidad de los procesos; “Una de las principales dificultades de nosotros no es la inversión, es la sostenibilidad. Es la necesidad de buscar una estructura para que los procesos continúen. No hay infraestructura, materiales ni recursos para que los jóvenes aprovechen las oportunidades” (Entrevista 31. Líder juvenil). En efecto, la principal amenaza de los procesos comunitarios es la falta de recursos para el funcionamiento de las organizaciones y sus integrantes; así mismo, se observa una falta de formación en algunos de los integrantes de las ONG y las fundaciones del sector privado (Entrevista 38. Funcionaria).

El problema de intermitencia o falta de continuidad en las intervenciones genera frustración entre los jóvenes, así como el riesgo de que muchos de ellos decidan involucrarse en actividades violentas o retomarlas (Acosta, et al., 2011). Un líder juvenil⁶⁶ relató cómo uno de los programas en los que participó obtuvo importantes resultados en el corto plazo, pero, con el tiempo, la suspensión de dicha iniciativa frustró los avances logrados: de los 9 jóvenes que para él estaban más comprometidos, 5 fueron asesinados, 2 tuvieron que desplazarse forzosamente del barrio y sólo 2 ejercieron las actividades en las que fueron capacitados.

De igual forma, las agrupaciones juveniles y las ONG de base tienen dificultades para trabajar articuladamente con el Estado⁶⁷ (Entrevista 44. Funcionaria). En parte, esto se debe tanto al desconocimiento de las iniciativas comunitarias en algunas entidades, como a la prevención de los líderes frente al manejo clientelista que puedan darles desde el Estado, como lo evidencia este testimonio:

Decidimos no recibirle nada a nadie porque cuando identificaron que existe un conglomerado para hacer cultura, y que

estas organizaciones ya salen en prensa y tienen el reconocimiento, ahora sí muchos quieren unirse para sacar propio provecho de esas iniciativas. Sobre todo los presidentes de barrio, que antes negaban la caseta, ahora sí quieren ofrecer cosas. Nosotros les decimos: ‘no señor, nosotros somos autosostenibles’. (Entrevista 31. Líder juvenil)

Aún así, en terreno se reportó que muchas organizaciones se han relacionado en prácticas de clientelismo con funcionarios públicos; “En el Distrito de Aguablanca existían muchos procesos de articulación de esfuerzos; había una mesa con más de sesenta líderes comunitarios que trabajaban en procesos de base con jóvenes, pero fueron divididos por la política” (Entrevista 25. Funcionaria).

Además, las organizaciones comunitarias tienen serias falencias para trabajar en red, debido, en parte, a la competencia entre algunas de ellas por mantener su influencia en ciertas poblaciones, a quienes hacen beneficiarios únicamente de las intervenciones en que participan (Entrevista 38. Funcionaria). Algunas de estas organizaciones, a su vez, han tenido conflictos con otras instancias de liderazgo comunitario, especialmente las JAC y las JAL⁶⁸ (Entrevista 44. Funcionaria).

Por último, cabe destacar que el alto nivel de violencia y control de algunos territorios por parte de GVO se convierte en un obstáculo adicional que deben afrontar las intervenciones de todos los sectores, incluso el Estado⁶⁹.

4.5. Conclusiones

Cali es la ciudad de interés con la problemática más grave de violencia juvenil durante el período de análisis. Esto se debe, entre otros factores, a la transición de los grupos juveniles violentos por antonomasia, las pandillas, en organizaciones cada vez más criminales y violentas; a la alta participación de jóvenes en grupos del crimen organizado y en grupos del conflicto; y a la persistencia de situaciones críticas de violencia que afectan gravemente a los jóvenes como los homicidios y las restricciones a la libertad.

Estas problemáticas se hacen mucho más graves en amplias zonas marginales de la ciudad, como el Distrito de Aguablanca, parte del área nororiental y la zona de Ladera, en donde el incremento de los asentamientos ilegales, la subsistencia de muy altos niveles de pobreza, la oferta limitada de bienes y servicios públicos, y la exclusión de estas poblaciones del resto de la ciudad han creado las condiciones propicias para la concentración de GVO.

En estos territorios, los riesgos de que un joven sea víctima de homicidio o quede “atrapado” en el territorio son mucho mayores que en otras zonas de la ciudad, dada la disputa de pandillas y bandas por el control del microtráfico y las actividades criminales al interior de estos barrios. De igual forma, allí se presenta una serie de influencias que hacen más vulnerables a los jóvenes frente a la opción de convertirse en pandilleros, jefes de bandas criminales o la mano derecha del jefe de una oficina de cobro, un narcotraficante o un GPDP.

Sin embargo, durante el período de estudio también se identificaron importantes esfuerzos por proteger e incrementar la resiliencia de los jóvenes frente a la violencia organizada, desde las organizaciones de base, las fundaciones privadas, la cooperación internacional y el Estado. En todo caso, dada la magnitud del fenómeno de violencia juvenil, estas iniciativas han resultado ser insuficientes y limitadas en su alcance.

En ese sentido, las estrategias de represión de la criminalidad que está implementando la administración municipal deben estar acompañadas por un incremento en las iniciativas de prevención de la violencia juvenil desde el Estado en asocio con los otros sectores interesados en esta problemática (p.e. el programa Oriente Ando), así como por un esfuerzo más decidido por recuperar de la pobreza a las poblaciones de los barrios periféricos y tradicionalmente marginales de Cali.

De igual forma, la política de seguridad debe apuntar y ser más contundente en la consecución de tres objetivos: primero, controlar la disponibilidad de armas en manos de particulares; con la situación de seguridad de la ciudad las autoridades deberían seguir el modelo de otras capitales, como Bogotá, que solicitaron la restricción definitiva al porte de armas de los ciudadanos. Segundo, combatir la corrupción al interior de la Fuerza Pública, especialmente, en la Policía, y romper los vínculos de agentes estatales con grupos de crimen organizado. Por último, desarticular las estructuras de los GPDP que hacen presencia en la ciudad, dado que estos grupos han sido los principales dinamizadores del conflicto y la violencia juvenil en los últimos años.

